

## LA REVANCHA DE LA MICROECONOMIA

David Ibarra  
5 de octubre de 1999

La acerba crítica al sistema anterior de manejo y regulación financieros y los elogios a la liberación de esos mercados, parecen haber quedado desmentidos por los hechos. Desde la Revolución de 1910, México no había registrado una crisis bancaria de la hondura que se vive en esta década de los noventa.

Lo paradójico no es que panageristas y críticos carezcan de razón, ni que no fuese indispensable emprender la modernización del sistema financiero nacional. Las dificultades centrales nacen de que las reformas se implantaron a troche moche, sin haber creado con antelación las instituciones y fijado las reglas que habrían de salvaguardar la salud y las funciones de la banca. Y sobre todo sin haber armonizado las políticas macro y microeconómicas.

La renuncia a una política industrial adaptativa --que acompañase a la supresión de las trabas al comercio exterior--, resultó incompatible con los énfasis de la política macroeconómica en usar la apreciación del tipo de cambio y las altas tasas de interés, sea para refrenar artificiosamente la inflación o atraer fondos de corto plazo con que cerrar la brecha de la balanza de pagos. Esa estrategia debilitó a la mayoría de las empresas nacionales y las colocó en una situación de indefensión económica frente a la competencia externa. El resultado no tardó en producirse, las empresas perdieron ingresos y mercado, mientras subían espectacularmente las obligaciones del servicio de los créditos contratados. De ahí, la explosión de las carteras vencidas de los bancos y la quiebra de muchos de ellos.

Las fallas microeconómicas no sólo tienen postrados a los bancos, sino que ponen topes a la tasa sostenible de desarrollo nacional. En efecto, la destrucción de empresas y

de los eslabonamientos entre las actividades productivas internas, entre las industrias grandes y las pequeñas, ha elevado considerablemente la propensión a importar. Cada vez que el producto crece uno por ciento, las compras externas lo triplican o cuadruplican.

Como resultado, la economía mexicana difícilmente puede crecer de modo sostenido más allá del 3%, sin que estalle la balanza de pagos. Así ocurrió en los años 1997 y 1998, cuando el ritmo de crecimiento de la economía fue de 6.8% y 4.8%, respectivamente. Los saldos de la balanza comercial brincaron de 6,500 millones (1996) de saldo positivo a cifras negativas de 7,700 millones (1998). De ahí los esfuerzos desesperados de las autoridades por reducir la expansión económica (cortos monetarios, alzas en las tasas de interés, recortes presupuestarios repetitivos) desde el primer trimestre de 1998 como vía indirecta de abatir la brecha externa.

No sólo se ha reducido a la mitad el ritmo de desarrollo nacional con respecto al período que va de 1940 a 1980, sino que el crecimiento asequible (3%) resultará notoriamente insuficiente al propósito de atenuar marginación y pobreza. Con aumentos de la productividad por hombre ocupado del orden del 3% anual --no del 5% como viene ocurriendo-- en el sector moderno de la economía, habrá capacidad nula de incorporar a trabajadores informales a puestos mejor remunerados.

Quiérase admitir o no, el modo de acomodarnos a la globalización universal ha seguido vías desequilibradas. La adaptación liberadora de nuestro comercio y finanzas ha sido rapidísima,. En contraste, los esfuerzos de adaptación interna han resultado magros o insuficientes. No se han implantado las estrategias preventivas del desempleo y la pobreza, ni fortalecido las redes necesarísimas de seguridad social o productiva para paliar la suerte de los numerosos perdedores del cambio económico.

Más aún, frente al apremio de ganar la simpatía de gobiernos y actores foráneos, se liberalizaron todas las transacciones externas, sin haber creado con antelación las instituciones de mercado o los sistemas precautorios de regulación interna. Ese es el caso de la debacle bancaria. De un lado, se destrabaron por entero los movimientos de la cuenta externa de capitales, dejando que la economía nacional asumiera los riesgos de los enormes movimientos financieros globalizados. Luego, sin crear un sistema de coberturas y sin reformar mayormente a las normas bancarias y a los sistemas de vigilancia, se liberalizaron las tasas de interés, se suprimieron los cajones crediticios y se comprimieron drásticamente las funciones de los fideicomisos de fomento y de la banca de desarrollo, cuando más se necesitaba que contribuyesen a la reconversión competitiva de la empresa mexicana.

Los resultados no se hicieron esperar. El cambio intempestivo del modelo financiero pocos efectos positivos trajo consigo. En contraste se rompieron los nexos simbióticos entre el sector productivo y la banca. Al comienzo, el crédito creció desmesuradamente —entre 1998 y 1994, subió del 49% al 72% del producto— y se canalizó preferentemente al consumo o al comercio, empobreciendo el financiamiento de industria y agricultura. Eso mismo cercenó los nexos de confianza y conocimiento mutuo entre empresarios y banqueros, y los colocó en trincheras separadas por diferencias mayúsculas en sus respectivos intereses. El colapso económico de 1995, dio la puntilla a la incapacidad de empresarios y deudores para servir sus préstamos.

Como señala Stiglitz (economista principal del Banco Mundial) “los sistemas financieros eficientes, robustos, profundos son esenciales al crecimiento y la estabilidad. Pero no alcanzan esas características por sí mismos. Los gobiernos juegan papel decisivo en vigilarlos y regularlos”. Eso fue precisamente lo que no se hizo en México, pasamos

sin escalas de un régimen de represión financiera a otro de libertinaje financiero, cuyos efectos todavía no acertamos a corregir.

Las consecuencias de la debacle bancaria son triples. Quiérase o no, obligará a la transferencia masiva de recursos fiscales al rescate del sistema financiero. En segundo término, la banca no logra fortalecerse, como lo manifiestan sus índices de subcapitalización. Y, en tercer lugar, está impedida de cumplir apropiadamente sus funciones de intermediación financiera, indispensables al desarrollo nacional.

En torno a la primera cuestión obsérvese que el costo fiscal del Fobaproa-IPAB conforme a los cálculos de la Secretaría de Hacienda continúa subiendo. Alcanzaba el 5% del producto en 1995, en junio del año en curso ya representa más del 19%. Los pasivos del IPAB suman 760 mil millones de pesos.

En los hechos, de reconocerse el saldo neto (500 mil millones de pesos), la deuda pública subiría 64% y acarrearía un servicio de intereses nominales de alrededor de 100 mil millones de pesos anuales. Es decir, sin cubrir el principal, el fisco pagaría año con año una suma equivalente al capital contable de toda la banca no intervenida (107 mil millones de pesos). Adviértase entonces, como independientemente de la suerte final del saneamiento bancario, ya se ha gestado una nueva fuente de desajuste fiscal que presionará a la baja el gasto programable de los próximos años.

Pese al trasvase de la cartera mala a Fobaproa, del uso de impuestos diferidos como parte del capital de la banca, de reglas liberales de valuación de activos intangibles e inversiones accionarias, de esfuerzos por atraer inversionistas del exterior, los capitales de la banca siguen siendo inapropiados.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Las nuevas reglas de capitalización y de valuación de cartera emitidas por la Secretaría de Hacienda son un avance importante al hacer más transparente y rigurosa la valuación de los balances de la banca, así como por implantar normas precautorias más estrictas.

En las condiciones expuestas, el sector bancario difícilmente podría cumplir sus funciones medulares de intermediación financiera. El crédito al sector privado viene decreciendo, en el último bienio cayó por encima del 10% en términos reales. Al parecer se forma un circuito financiero más y más cerrado en el cual los recursos frescos de la captación bancaria se destinan a cubrir las necesidades del sector público, asociadas íntimamente a las del servicio de la deuda Fobaproa-IPAB.

Es contradictorio, paradójico, que se haya trasvasado del sector público al privado la responsabilidad principal de la expansión productiva en la nueva estrategia de desarrollo y que al propio tiempo se le excluya del apoyo financiero interno. ¿Para qué entonces los esfuerzos privatizadores y desreguladores que han hecho disminuir a la mitad el peso del sector público en la economía y que marcan la retirada estatal de la producción?

En suma, los problemas bancarios no sólo se han constituido en fuente distorsionadora de las finanzas públicas que fuerza a cancelar erogaciones de la mayor prelación, sino también en rémora importantísima a la recuperación sana de la producción nacional. Los aciertos en la adaptación de nuestra economía al nuevo orden económico universal han quedado oscurecidos por estrategias que olvidaron la reconversión del grueso de nuestras empresas y la preservación de las fuentes de ingreso de los trabajadores. A su vez, ello imposibilitó que numerosos deudores hiciesen honor a los préstamos recibidos, a la par de expandir las necesidades de importación al romperse las cadenas productivas internas. Ahí están las raíces profundas de la debacle bancaria y la intensificación del estrangulamiento externo que sólo nos ofrecen la alternativa de endeudarnos en exceso o de crecer poquísimos.

El descuido del orden microeconómico ya se expresa en dilemas macroeconómicos mayúsculos. Ha quebrado buena parte de la pequeña y mediana

empresa, la banca se encuentra debilitada en extremo, se comienzan a dañar empresas grandes. Ya es hora de detener la destrucción del sector real de la economía, sin el cual no hay desarrollo posible.